

El arbitraje de marcas según el Derecho español (Ejemplo a seguir por el derecho marcario venezolano)

Joaquín Gonçalves do Espirito Santo*

ESPAÑA

AVANI, Nro. 4, 2023. pp. 221-241

Resumen: Este trabajo tiene como finalidad explicar de manera sucinta cómo funciona el arbitraje de marcas según el derecho español y consideramos que la regulación del arbitraje en España en materia de marcas es un hecho positivo que debe ser replicado en el derecho marcario venezolano. Establecer un régimen legal en el derecho de marcas venezolano que contemple la posibilidad de que las partes basándose en su propia autonomía de la voluntad puedan acceder a someter a un tercero el planteamiento de un litigio surgido con ocasión del procedimiento del registro de marcas es positivo y el mejor paradigma que podemos seguir en este sentido, es el establecido por sistema de arbitraje sobre marcas regulado en la Ley de Marcas española.

Palabras clave: marcas, arbitraje, signo distintivo.

Trademark arbitration according to Spanish Law (Example to follow for Venezuelan trademark law)

Abstract: *The purpose of this work is to explain in a concise way how trademark arbitration works according to Spanish law, and we consider that the regulation of arbitration in Spain regarding trademarks is a positive fact that must be replicated in Venezuelan trademark law. Establishing a legal regime in Venezuelan trademark law that contemplates the possibility that the parties, based on their own autonomy of will, can agree to submit to a third party the approach of a dispute arising from the trademark registration procedure is positive and the best example that we can follow in this regard is the one established by the trademark arbitration system regulated by the Spanish Trademark Law.*

Keywords: *trademarks, arbitration, distinctive sign.*

Recibido: 1/9/2023

Aprobado: 10/11/2023

* Abogado (UCAB, 1993) *Summa Cum Laude*; Doctor en Derecho, Gobierno y Gerencias Públicas (Universidad Autónoma de Madrid, 2020); Doctor en Derecho Privado (Universidad Carlos III de Madrid, 2020); Maestría en Derecho Privado (Universidad Carlos III de Madrid, 2013); Título de Estudios Avanzados en Derecho Mercantil (Universidad Autónoma de Madrid, 2010); MBA (Universidad Carlos III de Madrid, 2006); Maestría en Propiedad Intelectual (Universidad Carlos III de Madrid, 2005); LLM (Tulane University, 1996); LLM (University of Illinois, 1995).

El arbitraje de marcas según el Derecho español (Ejemplo a seguir por el derecho marcario venezolano)

Joaquín Gonçalves do Espirito Santo*

ESPAÑA

AVANI, Nro. 4, 2023. pp. 221-241

El arbitraje de marcas permite a las partes elegir árbitros con conocimiento y experiencia en derecho de marcas, lo que lleva a decisiones más informadas y coherentes. Además, el arbitraje de marcas puede aliviar la carga de las Oficinas de Registro de Marcas y de los tribunales estatales mercantiles, permitiéndoles centrarse en otros asuntos.

SUMARIO:

INTRODUCCIÓN. 1. Ámbito del arbitraje en materia marcaria según el derecho español 2. Características generales del arbitraje marcario español 3. El procedimiento arbitral en materia de marcas en España. 4. Necesidad de establecer arbitraje en materia de marcas en Venezuela. CONCLUSIONES.

INTRODUCCIÓN

En numerosos sistemas legales, como el español, el arbitraje representa un método alternativo de solución de conflictos en el cual las partes consienten en remitir su disputa a un árbitro o un tribunal arbitral privado en lugar de recurrir a los tribunales estatales. El arbitraje conlleva ciertos beneficios, tales como la adaptabilidad en el proceso, la confidencialidad y la especialización de los árbitros en campos particulares, como el derecho de marcas.

En España, el arbitraje de derecho de marcas estaría regulado por la Ley de Marcas española del año 2001¹, y supletoriamente por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, que establece el marco legal para el arbitraje de marcas en el país ibérico. Las partes pueden acordar someter sus disputas de derecho de marcas en lo referente al registro de una marca a un tribunal arbitral y determinar cómo se llevará a cabo el procedimiento.

* Abogado (UCAB, 1993) *Summa Cum Laude*; Doctor en Derecho, Gobierno y Gerencias Públicas (Universidad Autónoma de Madrid, 2020); Doctor en Derecho Privado (Universidad Carlos III de Madrid, 2020); Maestría en Derecho Privado (Universidad Carlos III de Madrid, 2013); Título de Estudios Avanzados en Derecho Mercantil (Universidad Autónoma de Madrid, 2010); MBA (Universidad Carlos III de Madrid, 2006); Maestría en Propiedad Intelectual (Universidad Carlos III de Madrid, 2005); LLM (Tulane University, 1996); LLM (University of Illinois, 1995).

¹ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

El arbitraje en materia de marcas se configura como un mecanismo procesal que incorpora aspectos positivos como la resolución por un tercero imparcial, la capacidad de las partes para tomar decisiones autónomas y el reconocimiento legal de la decisión, la cual tiene eficacia pública en términos jurídicos. Este sistema arbitral proporciona un proceso estructurado en el cual los individuos pueden asegurar el cumplimiento de sus derechos, respaldados por la autoridad de una decisión definitiva, ejecutiva y con carácter de cosa juzgada. En resumen, ofrece una vía alternativa para la resolución de conflictos en materia de marcas en lugar del sistema judicial estatal.

Es relevante destacar que uno de los aspectos innovadores introducidos por la Ley de Marcas española en el año 2001 fue la inclusión de un artículo específico sobre arbitraje, el cual se encuentra sistemáticamente enmarcado en las disposiciones generales sobre el procedimiento. La incorporación de la institución del arbitraje en el ámbito del derecho de marcas se mantuvo intacta durante la revisión de la Ley de Marcas española en 2018.² Esto posibilita la resolución de conflictos relacionados con el registro de marcas a través de un proceso de arbitraje.

Se destacan como ventajas de optar por el arbitraje en asuntos relacionados con marcas en lugar de recurrir a procedimientos judiciales la rapidez en la resolución de los casos y la posibilidad de contar con árbitros especializados en la materia.

En el contexto del derecho español, el arbitraje en temas de marcas es viable debido a que, en el proceso de registro de marcas, la Oficina Española de Marcas (la OEPM)³ solo examina las restricciones cuando un tercero legitimado presenta una oposición contra la solicitud de registro de una marca. Por lo tanto, las disputas que surgen entre el solicitante y el opositor durante el proceso de registro de la marca podrían someterse a arbitraje.

En cuanto al ámbito del arbitraje en cuestiones de marcas, se especifica que este se aplica exclusivamente a las controversias relacionadas con el registro de marcas. Otros temas relacionados con el derecho de marcas están sujetos al arbitraje general regulado por la Ley de Arbitraje española.⁴

En el derecho venezolano, no existe una regulación específica que aborde el arbitraje de asuntos de marcas de manera análoga a como está regulado en el derecho español. Esta omisión podría deberse a que los legisladores venezolanos no han considerado necesario o prioritario establecer regulaciones específicas para el arbitraje en cuestiones de marcas, lo cual podría ser considerado como una falta de atención en materia de legislación y responsabilidad legislativa.

² Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de **marcas**, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados.

³ Denominada la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

⁴ Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje

Contemplar normas que faciliten el arbitraje en materia de derecho marcario en Venezuela, tal como ocurre en el derecho español puede ser conveniente por varias razones:

- a. Flexibilidad y rapidez: El arbitraje permite a las partes adaptar el proceso a sus necesidades y preferencias, lo que puede agilizar el proceso en comparación con los tribunales estatales. En el caso de disputas de marcas, donde la celeridad puede ser crucial para proteger los derechos de propiedad intelectual, la flexibilidad y rapidez del arbitraje son ventajas significativas.⁵
- b. Especialización: Al permitir que las partes elijan árbitros con experiencia en derecho de marcas, se puede garantizar que las disputas sean resueltas por expertos en la materia. Esto puede conducir a decisiones más fundamentadas y coherentes en comparación con los tribunales generales.
- c. Confidencialidad: El arbitraje suele ser más confidencial que los litigios en tribunales estatales. En el caso de marcas, donde la reputación y la información comercial pueden estar en juego, la confidencialidad puede ser esencial.
- d. Control de costos: Aunque el arbitraje puede tener costos asociados, las partes tienen más control sobre los procedimientos y los gastos en comparación con los litigios judiciales. Esto puede hacer que el arbitraje sea más asequible y predecible para las partes involucradas en disputas de marcas.
- e. Reconocimiento internacional: El arbitraje tiende a tener un alto grado de reconocimiento y ejecución a nivel internacional debido a convenciones y tratados internacionales, como la Convención de Nueva York. Esto puede ser especialmente útil en el caso de disputas de marcas que involucran partes de diferentes jurisdicciones.
- f. Descongestión de tribunales: Permitir que ciertas disputas de marcas se resuelvan a través del arbitraje puede ayudar a aliviar la carga de los tribunales estatales y acelerar la resolución de otras disputas judiciales.
- g. Fomento de la inversión extranjera: Si un país establece un marco legal sólido para el arbitraje en materia de marcas, podría atraer inversiones extranjeras al ofrecer un sistema de resolución de disputas eficiente y confiable.

En nuestra opinión el sistema legal venezolano debe estipular una normativa de arbitraje en materia de derecho marcario, similar a lo que ocurre en España. La razón de ello es que la existencia de una normativa clara sobre arbitraje de marcas podría brindar previsibilidad a las partes solicitante y opositora, al establecer las reglas y procedimientos que se deberán seguir en caso de que decidan someter la disputa a la institución del arbitraje.

⁵ Alan Gladstone. "El arbitraje voluntario de los conflictos de intereses". Oficina Internacional del Trabajo . Ginebra. 1988

Conocer cómo funciona el arbitraje de derecho de marcas en España podría ser útil para permitir al legislador venezolano replicar una institución similar en el derecho venezolano. En efecto, conocer cómo se implementa y regula el arbitraje de derecho de marcas en otro país, como España, podría proporcionar valiosas ideas y orientación para la creación de una regulación similar en Venezuela. De allí la importancia de este breve resumen que explica cómo funciona el régimen de arbitraje de marcas en España, el cual podría ser muy útil para entender los elementos clave que podrían ser consideradas al explorar la posibilidad de implementar una institución similar en el derecho venezolano. Esto podría ayudar a los legisladores y a la comunidad legal de Venezuela a comprender mejor las implicaciones, los beneficios y los desafíos asociados con el arbitraje de derecho de marcas

1. **Ámbito del arbitraje en materia marcaria según el derecho español**

En España, el derecho a la utilización exclusiva de un signo como marca está sujeto al requisito de su inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Dado que las marcas carecen de una forma física concreta, su existencia, desarrollo y finalización dependen de un minucioso sistema de registro. Este sistema de registro otorga a la marca una existencia legal, acorde a su naturaleza inmaterial, mediante su inclusión en registros gubernamentales. El derecho a utilizar la marca de forma exclusiva está condicionado a su previo registro en la entidad competente (principio de registro constitutivo). La base de la exclusividad conferida a través del registro radica en la necesidad de proporcionar seguridad jurídica tanto al titular del signo como a terceros involucrados.

Para que una marca pueda ser registrada, el signo distintivo debe superar los criterios establecidos por las prohibiciones absolutas y relativas relacionadas con el registro de marcas. Para alcanzar este objetivo, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) lleva a cabo un examen, y se permite la presentación de oposiciones, lo que facilita la verificación de que la marca en cuestión no perjudique el interés público ni infrinja derechos ya establecidos. Estos procedimientos tienen como finalidad proteger diversos intereses al regular tanto las prohibiciones absolutas como las relativas, lo cual también impacta en la viabilidad de recurrir al arbitraje al considerar cada una de estas categorías.

La posibilidad de recurrir al arbitraje en esta etapa está prevista en la Ley de Marcas. Sin embargo, el uso de la institución arbitral en el proceso de concesión y otorgamiento de marcas no es completamente abierto, ya que existen ciertas restricciones y límites específicos para su aplicación.

En el ámbito del arbitraje, tradicionalmente se han excluido cuestiones que se consideran de interés público y aquellas que caen bajo la competencia exclusiva de las autoridades estatales. Estos principios están establecidos en la legislación española en

relación con el arbitraje en asuntos de marcas. Por lo tanto, los conflictos relacionados con la concesión, validez o nulidad del registro de una marca quedan excluidos del ámbito del arbitraje, y no es posible someter a arbitraje ni el proceso de inscripción ni el de cancelación de registros.

En consecuencia, es fundamental comprender cuáles son las prohibiciones absolutas y relativas que pueden impedir el registro de una marca. Esto adquiere relevancia porque solamente ciertos conflictos originados por la aplicación de las prohibiciones relativas son susceptibles de ser resueltos a través del arbitraje.

1.1. Prohibiciones absolutas (no es factible aplicar la institución arbitral)

Las prohibiciones absolutas buscan evitar que un signo distintivo pueda registrarse como marca debido a defectos intrínsecos del mismo, y engloban todas las razones que no están relacionadas con conflictos de derechos previos o terceros.

La razón de esta exclusión se basa en que el símbolo solicitado, por sus propias características, no cumple con los requisitos necesarios y permanentes para ser considerado una marca. Una marca recibe protección legal debido a su capacidad para distinguir y identificar los servicios y productos empresariales. Cuando un símbolo no puede cumplir con esta función, se niega su reconocimiento y protección como marca. La concesión de un derecho exclusivo se justifica para beneficiar a los consumidores en el proceso de vinculación de un producto con su fabricante y promover la competencia en beneficio del interés general. En el caso de las prohibiciones absolutas, existen intereses que merecen protección y van más allá de los del solicitante del símbolo.

En materia marcaria, los intereses de los consumidores son relevantes detrás de las prohibiciones absolutas, especialmente en el caso de signos que carecen de fuerza distintiva o que pueden generar confusión en el mercado. La comunidad tiene un interés significativo en protegerse de comportamientos confusos que podrían perjudicar tanto a los competidores como a los consumidores y al sistema competitivo en general.

Independientemente de cómo se interpreten las prohibiciones absolutas, es evidente que involucran una variedad de intereses en juego que apuntan a proteger objetivos distintos al solicitante que busca registrar una marca. Al abordar intereses más allá de los privados, las prohibiciones absolutas no permiten considerar que exista un tema o derechos disponibles que puedan ser sometidos a arbitraje.

En resumen, en la etapa de concesión de la marca y en lo que respecta a las prohibiciones absolutas, no es factible aplicar la institución arbitral, ya que no hay ningún asunto disponible. La diversidad de intereses involucrados también determina que la concesión de una marca sujeta a una prohibición absoluta resulta en una "marca nula", y esta nulidad es imprescriptible.

1.2. Prohibiciones relativas (posibilidad de recurrir al arbitraje)

Las prohibiciones relativas para el registro no se basan en los defectos intrínsecos del signo que se intenta registrar, sino en la colisión del signo con otros derechos anterior que hacen inviable el registro de la marca. En estos casos, la exclusión no se debe al signo en sí mismo, sino a un conflicto con derechos previos.⁶

El arbitraje en materia marcaria, bajo el sistema español, es un procedimiento que está previsto para casos específicos y solo se permite la presentación de un acuerdo arbitral una vez que se ha concluido el proceso administrativo, es decir, cuando se ha denegado el registro de la marca.⁷

La Ley de Marcas española reconoce la posibilidad de recurrir al arbitraje en lo que respecta a las prohibiciones relativas, ya que se considera que los únicos intereses en juego son los del empresario que busca registrar la marca y los del titular del signo ya registrado o del solicitante con un derecho prioritario. Sin embargo, es importante analizar en detalle los casos contemplados dentro de este grupo de prohibiciones, así como otras normativas aplicables, para identificar otros intereses considerados por el legislador.

En este contexto, el acceso de un signo como marca está restringido por los conceptos de confusión y riesgo de confusión, que buscan evitar el registro de signos idénticos o similares a los ya registrados (o solicitados) para productos o servicios que sean similares o relacionados. Es importante destacar que los casos de confusión o riesgo de confusión se producen en el mercado y afectan a los consumidores.

Cuando se presentan casos de confusión o riesgo de confusión, el signo en cuestión no puede ser registrado ni goza de protección. En primer lugar, se protege el interés del empresario titular, pero también se protege el interés de los consumidores.

Es fundamental tener en cuenta que el interés de los consumidores prevalece sobre la voluntad de las partes involucradas en un conflicto de riesgo de confusión. Aunque el uso de la institución arbitral está permitido en esta etapa de concesión, su viabilidad está condicionada por la afectación de intereses de terceros. La Ley de Marcas española permite que las partes en un procedimiento de concesión acuerden la solución de la disputa sobre el signo en conflicto, y este acuerdo puede ser alcanzado a través de un procedimiento arbitral que emita un laudo sobre los derechos respecto de la marca.

⁶ Merino Merchán J.F. "El arbitraje en el proyecto de Ley de Marcas", Oficina Española de Patentes y Marcas. Escuela de Organización Industrial.

⁷ Artículo 28.4 de la Ley de Marcas

En consecuencia, en la etapa de concesión del signo y en lo que respecta a las prohibiciones relativas, la aplicación de la institución arbitral es posible siempre y cuando no se afecte el interés general de los consumidores u otros terceros interesados.

En el derecho español las cuestiones que cabe someter a arbitraje sólo podrán versar sobre las prohibiciones relativas para el registro de una marca previstas la Ley de Marcas.

Por tanto, no todas las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del procedimiento para el registro de una marca pueden ser sometidas a arbitraje. La propia Ley de Marcas española establece el ámbito del arbitraje. El arbitraje sólo podrá versar sobre las prohibiciones relativas previstas en los artículos 6.1.b) (riesgo de confusión entre marcas), 7.1.b) (riesgo de confusión entre nombres comerciales y marcas), 8 (riesgos de confusión y de asociación con marcas y nombres comerciales notorios y renombrados) y 9 (derechos anteriores de variada naturaleza como el derecho al nombre, la imagen, derechos de propiedad intelectual, etc.).

Por lo tanto, a pesar de que el objetivo del arbitraje en asuntos de marcas se centra en las prohibiciones relativas de registro, no todas estas prohibiciones pueden ser sometidas a arbitraje. Específicamente, quedan excluidas aquellas prohibiciones relativas contempladas en los artículos 6.1.a), 7.1.a) y 10 de la Ley de Marcas española.

La exclusión de las prohibiciones contenidas en los artículos 6.1.a) y 7.1.a) de la Ley de Marcas española se basa en la convicción del legislador español de que estas prohibiciones relativas trascienden el mero interés privado. Por tanto, no se puede dejar la resolución de estas cuestiones únicamente en manos de las partes involucradas. Esto se debe a que el interés general exige que no exista una marca idéntica a otra marca o nombre comercial previamente registrado para productos o servicios idénticos.

En cuanto a la exclusión del arbitraje de la prohibición relativa establecida en el artículo 10 de la Ley de Marcas, esta medida tiene como objetivo evitar que un agente o representante pueda registrar la marca de su representado en su propio país sin su consentimiento, en otro estado miembro del Convenio de la Unión de París o de la Organización Mundial del Comercio. Para mantener esta cuestión bajo la jurisdicción de la OEPM, se excluye esta materia del proceso de arbitraje específico.

Además, la Ley de Marcas española establece que las prohibiciones absolutas de registro y las cuestiones relacionadas con la presencia o ausencia de defectos formales no pueden ser sometidas a arbitraje en ningún caso⁸. La razón de estas dos exclusiones es clara: tanto los defectos formales como las prohibiciones absolutas de registro son asuntos sobre los cuales solo la administración o los tribunales tienen competencia, ya que se trata de cuestiones que no pueden ser decididas por las partes involucradas.

⁸ Artículo 28 de la Ley de Marcas española.

Según lo establecido en la Ley de Marcas española, el arbitraje se aplica de manera limitada a las prohibiciones relativas contempladas en los artículos 6.1 b, 7.1 b, 8 y 9 de dicha ley. Ahora bien, vamos a ver al detalle las disputas sobre prohibiciones relativas, que, según el derecho marcario español, pueden ser objeto de arbitraje.

a. Artículo 6.1 b de la Ley de Marcas española (Marcas anteriores):

Se refiere a aquellos procedimientos en los que la controversia gire en torno a la determinación de la identidad o similitud con una marca anterior y en los casos en los que los productos o servicios que ofrece sean idénticos o similares. Esto, es puede ser objeto de arbitraje lo que genere un riesgo de confusión al asociarlos con una marca previamente registrada.

b. Artículo 7.1 b de la Ley de Marcas española (Nombres comerciales anteriores):

Trata sobre los procedimientos en los que se determine la identidad o similitud con un nombre comercial anterior, y cuando las actividades designadas por los productos o servicios para los que se solicita la marca sean idénticas o similares, lo que también genera confusión entre el público consumidor.

c. Artículo 8 de la Ley de Marcas española (Marcas y nombres comerciales renombrados):

En los procedimientos en los que se establezca que una marca o nombre comercial es idéntico o similar a una marca o nombre comercial anterior, incluso si se solicita su registro para productos o servicios diferentes a los protegidos por esas marcas o nombres comerciales notorios y renombrados. Esto se aplica cuando existe la posibilidad de aprovechar indebidamente o perjudicar el carácter distintivo, notoriedad o renombre de dichos signos. Se considera una marca o nombre comercial notorio aquel que es generalmente conocido debido a su volumen de ventas, duración, intensidad de uso, alcance geográfico, valoración o prestigio. La protección se extiende a otros tipos de productos, servicios o actividades cuando la marca o nombre comercial es ampliamente conocido por el público en general.

d. Artículo 9 de la Ley de Marcas española (Otros derechos anteriores):

También es posible someter a arbitraje las cuestiones relacionadas con el registro de marcas en las que se evalúe la licitud del registro de un nombre civil o una imagen que identifique a una persona distinta al solicitante; el nombre, apellido, seudónimo u otro signo que identifique a otra persona diferente al solicitante y sea reconocido por el público en general; los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por derechos de autor u otros derechos de propiedad industrial; el nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que identifique en el comercio a una entidad diferente del solicitante y conlleve un riesgo de confusión en el público (el titular de estos signos tiene la responsabilidad de demostrar su uso o notoriedad). Además,

también se pueden arbitrar las disputas surgidas debido al registro de marcas que incluyan el nombre, apellido, seudónimo u otro signo que identifique al solicitante del registro.

En resumen, el arbitraje se aplica de manera específica a ciertas prohibiciones relativas contempladas en los artículos mencionados, abordando cuestiones relacionadas con la identidad, similitud, renombre y otros aspectos cruciales para la protección de marcas y nombres comerciales.

2. Características generales del arbitraje marcario español

El arbitraje establecido en el artículo 28 de la Ley de Marcas se caracteriza por ciertas particularidades en comparación con el procedimiento típico contemplado en la Ley de Arbitraje. Estas particularidades surgen debido a que este arbitraje tiene un impacto directo en el Registro de Marcas, y, por lo tanto, es esencial garantizar que no se comprometan los principios fundamentales del sistema registral.

Como hemos observado, la Ley de Marcas española incorpora disposiciones relacionadas con el arbitraje. Esta legislación prevé la posibilidad de recurrir al arbitraje para resolver actos administrativos que concluyan el proceso de registro de marcas. En particular, la Ley de Marcas española aborda las modalidades y particularidades de un proceso de arbitraje especial aplicable al procedimiento de registro de marcas⁹. Esta ley también aborda la opción y el derecho de recurrir al arbitraje en relación con las disputas que puedan surgir durante el proceso de registro de una marca.

La inclusión del arbitraje en el derecho de marcas español refleja la voluntad del legislador, que busca promover el principio de economía procesal al permitir que el acuerdo arbitral actúe como un reemplazo de los recursos legales tradicionales (recurso ordinario y contencioso-administrativo).

Una característica destacada de esta institución, como mencionamos anteriormente, es el alcance del acuerdo arbitral, que está definido por la ley de marcas. La ley establece que los supuestos de prohibiciones relativas (incompatibilidad de marcas) pueden ser objeto de un acuerdo arbitral. Esto tiene sentido, ya que las prohibiciones absolutas son cuestiones de orden público que deben ser resueltas por la administración.

Si las partes optan por celebrar un convenio arbitral, el solicitante debe esperar a que se conceda o deniegue su marca, y una vez que se haya tomado esa decisión, debe presentar el acuerdo firmado entre las partes ante la entidad de registro correspondiente. Esto es una peculiaridad del arbitraje en el marco de la Ley de Marcas española, ya

⁹ A. Bercovitz Rodríguez- Cano (Director), J.A García- Cruces González y colaboradores. "Comentarios a la Ley de Marcas". A. Bercovitz Rodríguez- Cano (Director), J.A García- Cruces González y colaboradores. Editorial Aranzadi. Navarra. 2003.

que su propósito es reemplazar el proceso de apelación y el proceso contencioso-administrativo. Por lo tanto, cuando se deniega una marca, el siguiente paso en el proceso, que normalmente sería el recurso, se reemplaza por el acuerdo arbitral.

A continuación, resaltaremos las características más importantes del arbitraje en el contexto de las marcas en España:

a) Arbitraje sobre asuntos de derecho dispositivo o privado

El arbitraje previsto por la Ley de Marcas es de carácter privado, ya que es entre particulares que voluntariamente se someten a este procedimiento y donde no tiene cabida la Administración para obligar a las partes a someterse a él¹⁰. En efecto, la Ley de Marcas española ofrece la oportunidad a los particulares de someter a arbitraje los actos dictados por la OEPM cuando deniegue la concesión de la marca estimando que ésta ya existe o hay riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación.

b) Arbitraje de derecho

Respecto al tipo de arbitraje, la Ley de Marcas española no especifica si se trata de un arbitraje de derecho o de equidad. Conforme a la Ley de Arbitraje de España, los árbitros solo pueden decidir en equidad si las partes les otorgan la autorización para hacerlo. Esto plantea la pregunta de si las partes pueden autorizar a los árbitros a decidir en equidad en el arbitraje de marcas. Esta cuestión es relevante porque, si se permite la equidad, cualquier persona que esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles podría actuar como árbitro, sin necesidad de ser abogado en ejercicio.

Sin embargo, consideramos que las controversias sobre marcas solo pueden resolverse conforme a derecho. En este contexto, es importante destacar que el litigio que se plantea en el arbitraje consiste en determinar si una solicitud de marca específica infringe alguna de las prohibiciones relativas de registro. Por lo tanto, parece claro, en nuestra opinión, que el arbitraje previsto en la Ley de Marcas española debe decidirse, en cualquier caso, de acuerdo con la ley, lo que implica que el árbitro debe ser un abogado en ejercicio.

c) Arbitraje especialmente restringido

La Ley de Marcas, como vimos, establece una restricción respecto a los supuestos en que puede acudir al arbitraje, así lo dice el artículo 28.2: “el arbitraje sólo podrá versar sobre las prohibiciones relativas de los artículos 6.1 b, 7.1 b, 8 y 9. No existe, por tanto, una libertad de las partes para acudir al arbitraje, el legislador restringe esta posibilidad, como vimos, a los casos señalados de prohibiciones relativas.

¹⁰ Merino Merchán J.F. “El arbitraje en el proyecto de Ley de Marcas”, Oficina Española de Patentes y Marcas. Escuela de Organización Industrial.

d) Remisión a la Ley 60/2003, de 5 de diciembre, de Arbitraje.

La Ley de Marcas no crea un arbitraje “ex novo”, se basa y remite en todo lo no especificado por la especialidad de la materia en sus apartados, a la Ley de Arbitraje.¹¹ En efecto, el apartado 6 del artículo 28 de la Ley de Marcas de España establece de manera expresa el carácter supletorio de la Ley de Arbitraje en todo lo que no esté previsto en dicho precepto.

Ejemplo de esta remisión, está en el hecho de que el régimen jurídico aplicable respecto a la fuerza vinculante del Convenio, forma, prueba, elección de árbitros, fases del proceso y formalización jurisdiccional se estará a lo que dispone la Ley 60/2003.

En este sentido, es importante señalar que la Ley de Marcas incluye particularidades específicas y distintivas debido a la naturaleza de la materia, como los actores que pueden someter el conflicto al arbitraje y ciertos requisitos formales para informar a la OEPM sobre el estado del procedimiento, entre otros aspectos.

e) Notificación a la OEPM.¹²

Debido a la especialización de esta área y a la novedad de su regulación, la Ley de Marcas española dispone que tanto el convenio arbitral acordado por las partes como el laudo arbitral definitivo que resuelva el conflicto sometido a esta jurisdicción arbitral deben ser notificados de manera fehaciente a la OEPM.

El convenio arbitral debe notificarse al concluir el proceso administrativo de registro de la marca y antes de que el acto administrativo sea definitivo, como establece el artículo 28.4 de la Ley de Marcas.

En cuanto a la comunicación del laudo arbitral definitivo, la Ley de Marcas española detalla que se dispone de un plazo de 6 meses para llevar a cabo esta notificación a la OEPM, plazo que comienza a contar a partir de la recepción de la notificación según lo estipulado en el artículo 28.7 de la Ley de Marcas. Transcurrido este plazo, el laudo arbitral ya no podrá ejecutarse. Este plazo para notificar el convenio arbitral a la OEPM es sumamente preciso y no admite prórroga, incluso si las partes acuerdan dicha extensión de manera mutua. El artículo 28.4 de la Ley de Marcas aclara que esta obligación de notificar el convenio arbitral se aplica de manera obligatoria a todos los interesados. Su propósito principal es establecer con precisión el momento exacto en que comienza el procedimiento arbitral, lo que, a su vez, marca el inicio del período de seis meses estipulado la Ley de Marcas española con respecto a la comunicación del laudo.

¹¹ Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. BOE 26-12-2003.

¹² Artículo 29 de la Ley de Marcas.

3. El procedimiento arbitral en materia de marcas en España

3.1. Consideraciones generales

El procedimiento de arbitraje en el contexto de marcas presenta particularidades significativas tanto en su naturaleza como en sus efectos posteriores en el registro de marcas. El arbitraje no debe desvirtuar los principios fundamentales que rigen todo registro, como la presunción de veracidad y concordancia con la realidad.¹³

En lo que respecta al procedimiento arbitral, este se ajustará rigurosamente a los principios fundamentales de igualdad, audiencia y contradicción, tal como establece el artículo 24.1 de la Ley de Arbitraje¹⁴. Además, el procedimiento se regirá por las disposiciones de la Ley de Arbitraje en todo lo no específicamente previsto por las partes.

La Ley de Marcas española no establece disposiciones específicas sobre la designación de árbitros, por lo que se aplica la Ley de Arbitraje de forma supletoria¹⁵. Se plantea la cuestión de si el arbitraje puede ser de equidad o de derecho, pero dado el carácter específico de la Ley de Marcas, es probable que sea necesario que los árbitros sean abogados en ejercicio o juristas especializados en la materia.

El convenio arbitral debe formalizarse por escrito y expresar la voluntad de someter la controversia a uno o más árbitros. Durante el proceso arbitral, se llevan a cabo procedimientos como audiencia y contradicción para asegurar la igualdad entre las partes. Además, se establecen plazos para las alegaciones y la presentación de pruebas.

El lugar donde se desarrolla el procedimiento arbitral es importante, ya que puede determinar la ley aplicable. Las notificaciones entre el árbitro y las partes son esenciales y requieren la designación de domicilios válidos. La práctica de pruebas es fundamental en el proceso, y se pueden solicitar auxilios judiciales si es necesario. Finalmente, antes de emitir un laudo, es posible que se escuche nuevamente a las partes para resumir las pruebas presentadas anteriormente.

En cuanto a la duración del procedimiento arbitral, la Ley de Marcas de España no establece un plazo específico para su conclusión, por lo que se aplicará la Ley de Arbitraje española. De acuerdo Ley de Arbitraje de España, a menos que las partes acuerden lo contrario, la resolución de la disputa se llevará a cabo en un plazo máximo de seis meses a partir de la presentación de la respuesta a la demanda o, en su defecto, a partir

¹³ A. Ruiz Velasco. "Manual de Derecho Mercantil". Publicación de la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid). 1999.

¹⁴ A. M. Chocrón Giráldez. Los principios procesales en el arbitraje." Editorial J.M Bosch. Barcelona.2000.

¹⁵ Lorca Navarrete A.M; Valencia Mirón A.J; Font Serra E.; Iriarte Angel J.L. "Comentarios a la Ley de Arbitraje". Editorial Dykinson. Madrid. 1991.

del vencimiento del plazo para presentarla. Este plazo podrá ser ampliado, a menos que las partes dispongan lo contrario, por los árbitros a través de una decisión debidamente justificada, por un período que no exceda los dos meses adicionales.¹⁶

3.2. El Convenio arbitral en materia de marcas

La Ley de Marcas española no ofrece directrices específicas en cuanto a la forma y contenido del convenio arbitral. En la Ley de Marcas de España, el legislador se limita a indicar quiénes deben suscribir el convenio arbitral para que sea válido. Entre los puntos que resultan de interés previstos en la Ley de Marcas española con relación al convenio arbitral cabe mencionar los siguientes:

a) Las partes suscriptoras del convenio arbitral

En relación con los sujetos que han de suscribir el convenio arbitral, la Ley de Marcas española dispone que, además del solicitante de la marca, para que sea válido el convenio arbitral ha de estar suscrito por: a) Los titulares de los derechos anteriores que hubieren causado la denegación de la marca y, en su caso, sus licenciatarios exclusivos inscritos. b) Los titulares de los derechos anteriores que hubieran formulado oposición al registro de la marca y, en su caso, Sus licenciatarios exclusivos inscritos. c) Quienes hubieran interpuesto recurso o hubieran comparecido durante el mismo.

Cuando la Ley de Marcas española establece que el convenio arbitral debe ser suscrito por todas estas partes mencionadas, entendemos que se debe firmar después de que la OEPM haya resuelto sobre la inscripción o denegación del registro de marca. Solo en ese momento se puede determinar con certeza quiénes deben firmarlo y, por lo tanto, otorgarle validez.

b) Obligación de notificar el convenio arbitral

Como se mencionó anteriormente, la Ley de Marcas española establece que el convenio debe ser notificado a la OEPM por todos los interesados en un momento específico, es decir, cuando finalice el procedimiento administrativo de registro de marca y antes de que el acto administrativo que ponga fin al proceso adquiera firmeza.

La razón detrás de esta notificación y su carácter obligatorio radica en la importancia significativa de estos actos para un registro público como el Registro de Marcas. El principio de seguridad jurídica dicta que no se pueden someter a arbitraje cuestiones que ya han sido resueltas por un acto administrativo firme. Además, de acuerdo con la Ley de Marcas española, las decisiones tomadas en este arbitraje no pueden ser objeto de recurso alguno.

¹⁶ Gaspar Lera, Silvia. El ámbito de aplicación del arbitraje. Pamplona: Aranzadi, 1998, p. 64.

La Ley de Marcas española no determina cuándo debe suscribirse el convenio, pero de la propia mención de las personas que deben firmarlo se deduce que deberá ser suscrito una vez que haya concluido el procedimiento seguido ante la OEPM y antes de que sea firme el acto de concesión o de denegación.

Esta obligación, y el momento en el que debe cumplirse, obedece a la necesidad de que quede constancia en la OEPM de la voluntad de los interesados de someter la controversia a arbitraje y que ello se haga con anterioridad a que el acto administrativo haya ganado firmeza.

c) Efectos del convenio arbitral en materia marcaria

El principal efecto de la firma y notificación del convenio a la OEPM es que, mientras esté vigente, no será posible interponer ningún recurso ordinario, y se declarará la inadmisibilidad de cualquier recurso que se haya presentado previamente. En caso de que se hubiera interpuesto un recurso antes de la suscripción del convenio, se considerará desistido.

Otro efecto relevante es que “una vez resuelto el recurso de alzada contra el acto que conceda o deniegue el registro, quedará expedita la vía contencioso-administrativa a menos que las partes hagan valer la firma del convenio arbitral ante la oficina”. Para que esto suceda, las partes deben firmar el convenio arbitral después de que la OEPM haya resuelto el recurso de alzada, pero antes de que esta resolución sea firme. Esto se debe a que las partes solo pueden suscribir el convenio arbitral una vez que la OEPM haya resuelto el recurso de alzada contra el acto de concesión o denegación del registro. Si se hubiera presentado un recurso administrativo antes de la firma del convenio arbitral, se consideraría desistido, por lo que no habría resolución del recurso de alzada por parte de la OEPM en ese caso.

En resumen, los efectos del convenio arbitral, es que una vez se firma y notifica el convenio arbitral, se impide la interposición de recursos ordinarios. Además, se establece un efecto en relación con los recursos de alzada presentados antes de la firma del convenio.

3.3. El Laudo Arbitral en materia de marcas

El laudo emitido en el arbitraje de marcas según la Ley de Marcas de España debe cumplir con las especificaciones establecidas en la Ley de Arbitraje española. En consecuencia, debe ser redactado por escrito, firmado por los árbitros y las partes, motivado y se deben indicar la fecha y el lugar en que se emitió.

Además, como mencionamos anteriormente, el laudo arbitral debe comunicarse de manera fehaciente a la OEPM. Esta comunicación es una característica singular del arbitraje de marcas en España, ya que la OEPM es la entidad encargada de llevar a cabo la ejecución del laudo arbitral firme.

En cuanto a los efectos del laudo arbitral, la Ley de Marcas de España establece que un laudo arbitral firme tendrá los efectos de cosa juzgada, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Arbitraje española. En el contexto del arbitraje de marcas según la Ley de Marcas española, esto implica que la decisión del árbitro sobre la concesión o denegación de la marca será definitiva y firme.

Los únicos casos en los que se puede impugnar la decisión arbitral en cuestiones relacionadas con marcas son a través del recurso de revisión, regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y el recurso de anulación del laudo, establecido en la Ley de Arbitraje española, de acuerdo con los motivos específicos señalados en esta ley.¹⁷

En lo que respecta a la ejecución del laudo, la Ley de Marcas estipula que la OEPM llevará a cabo todas las acciones necesarias para ejecutar el laudo arbitral firme. En la práctica, esto implica que la resolución arbitral, ya sea de concesión o denegación de la solicitud de marca, se reflejará en el expediente de la marca correspondiente.¹⁸

4. Necesidad de establecer arbitraje en materia de marcas en Venezuela

Las disputas de marcas pueden ser intrincadas y multifacéticas. A menudo involucran cuestiones relacionadas con la infracción de marcas, la falsificación, la imitación, el uso no autorizado, entre otros. Estos asuntos pueden ser desafiantes de manejar de manera efectiva para los tribunales tradicionales debido a su naturaleza técnica. Los árbitros especializados en derecho de marcas pueden proporcionar resoluciones más matizadas y eficientes.

Venezuela es signataria de varios acuerdos y tratados de comercio internacional, como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Estos acuerdos requieren que los estados miembros proporcionen medios efectivos para proteger las marcas. Establecer el arbitraje de marcas se alinea con estas obligaciones internacionales y demuestra el compromiso de Venezuela con la defensa de los derechos de propiedad intelectual.

Por otra parte, como vimos antes, las marcas son esenciales para establecer y mantener la confianza del consumidor. Cuando los consumidores ven una marca, la asocian con un cierto nivel de calidad y confiabilidad. Resolver las disputas de marcas de manera rápida a través del arbitraje garantiza que los consumidores puedan confiar en los productos o servicios asociados con esas marcas. Esta confianza es fundamental tanto para el comercio nacional como para el internacional.

¹⁷ Martínez García. E. "El arbitraje en el marco de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil". Editorial Tiran lo Blanch "abogacía práctica". Valencia 2002

¹⁸ Alan Gladstone. "El arbitraje voluntario de los conflictos de intereses". Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra. 1988

Establecer el arbitraje de marcas también puede promover el crecimiento de centros de arbitraje en Venezuela. Estos centros pueden servir como puntos de referencia para la resolución de disputas en diversos campos, fortaleciendo aún más la infraestructura legal del país.

La implementación del arbitraje en materia de marcas en Venezuela, siguiendo las pautas contempladas en el derecho de marcas de España, podría responder a diversas necesidades y beneficios, entre los cuales se incluyen:

- a. Descongestión Judicial: Venezuela, como muchos otros países, enfrenta una carga significativa en sus tribunales debido a la cantidad de casos pendientes. Introducir el arbitraje en materia de marcas podría ayudar a reducir esta carga al derivar disputas de marcas a procedimientos más ágiles y especializados.

Los tribunales sobrecargados de casos pueden llevar a retrasos en los litigios de marcas. Estos retrasos pueden perjudicar a las empresas que buscan una protección oportuna para su propiedad intelectual. Al desviar las disputas de marcas hacia el arbitraje, los tribunales pueden centrarse en otros asuntos críticos, como casos penales o desarrollo de infraestructura.

- b. Eficiencia y Agilidad: Los procedimientos judiciales en Venezuela pueden ser notoriamente lentos. El arbitraje, al ofrecer un proceso más rápido y flexible, podría acelerar la resolución de disputas de marcas y reducir la incertidumbre para las partes involucradas.
- c. Especialización: El arbitraje permite la selección de árbitros con experiencia específica en marcas y propiedad intelectual. Esto garantiza que las decisiones se tomen con un conocimiento profundo de las leyes y prácticas relacionadas con las marcas.
- d. Confidencialidad: En muchos casos, el arbitraje permite mantener la confidencialidad de los procedimientos, lo que puede ser crucial en disputas de marcas para proteger información sensible sobre productos, estrategias comerciales y propiedad intelectual.
- e. Cosa Juzgada: Al igual que en el derecho español, el arbitraje en Venezuela podría otorgar efectos de cosa juzgada a los laudos arbitrales, lo que brinda certeza y finalidad a las decisiones.
- f. Promoción de la Resolución Alternativa de Disputas: Fomentar el arbitraje en materia de marcas podría promover una cultura de resolución alternativa de disputas en Venezuela, alentando a las partes a buscar soluciones fuera de los tribunales.
- g. Reducción de Costos: En algunos casos, el arbitraje puede ser más económico que los procedimientos judiciales tradicionales, lo que beneficia a las partes involucradas.

- h. Recursos del Gobierno: El gobierno puede asignar sus recursos de manera más efectiva cuando las disputas de marcas se resuelven a través del arbitraje. Esto puede liberar fondos y personal para otras áreas importantes, como casos penales o desarrollo de infraestructura.
- i. Soluciones Personalizadas: El arbitraje permite a las partes diseñar su proceso de resolución de disputas para adaptarse a sus necesidades. Esta flexibilidad puede conducir a soluciones más creativas y personalizadas para los conflictos de marcas, promoviendo la equidad y la satisfacción entre las partes involucradas.
- j. Internacionalización: Venezuela podría aprovechar el arbitraje para abordar disputas internacionales relacionadas con marcas, lo que facilitaría la resolución de conflictos que involucran a empresas extranjeras y protegería los intereses nacionales en el ámbito internacional.
- k. Innovación y Crecimiento Económico: La protección de la propiedad intelectual, incluidas las marcas, está estrechamente relacionada con la innovación y el crecimiento económico. Las empresas tienen más probabilidades de invertir en investigación, desarrollo y branding cuando saben que sus derechos de propiedad intelectual están seguros. Un arbitraje eficiente de marcas puede incentivar la innovación, lo que conduce a beneficios económicos para Venezuela. Mecanismos predecibles y confiables de resolución de disputas, como el arbitraje de marcas, contribuyen a la certeza legal. Las empresas e inversores pueden tener la confianza de que sus disputas de marcas se resolverán de manera justa y eficiente, lo que fomenta la inversión extranjera directa.
- l. Disputas Transfronterizas: Con el crecimiento del comercio electrónico y la globalización, las disputas de marcas a menudo involucran a partes de diferentes países. La litigación tradicional puede ser engorrosa en casos transfronterizos. Contar con un proceso de arbitraje de marcas simplificado que acomode a partes y árbitros internacionales puede facilitar la resolución y mejorar la atracción de Venezuela como centro de negocios.

La necesidad de arbitraje de marcas en Venezuela va más allá de simplemente resolver disputas. Incluye obligaciones internacionales, crecimiento económico, protección del consumidor, certeza legal y asignación eficiente de recursos. Al adoptar el arbitraje de marcas, Venezuela puede mejorar su marco legal y posicionarse mejor en la economía global. En resumen, la implementación del arbitraje en materia de marcas en Venezuela podría abordar varios problemas y desafíos en el sistema judicial, al tiempo que brindaría beneficios como la eficiencia, la especialización y la promoción de soluciones extrajudiciales. Esto podría mejorar la calidad y la rapidez de la resolución de disputas de marcas y fortalecer el sistema legal en el país.

CONCLUSIONES

Hemos visto en este trabajo cómo funciona el arbitraje de marcas según el derecho español y consideramos que la regulación del arbitraje en España en materia de marcas es un hecho positivo que debe ser replicado en el derecho marcario venezolano. Establecer un régimen legal en el derecho de marcas venezolano que contemple la posibilidad de que las partes basándose en su propia autonomía de la voluntad puedan acceder a someter a un tercero el planteamiento de un litigio surgido con ocasión del procedimiento del registro de marcas es positivo y el mejor paradigma que podemos seguir en este sentido, es el establecido por sistema de arbitraje sobre marcas regulado en la Ley de Marcas española.

La razón de ello es que en España se ha demostrado que el arbitraje en materia de marcas facilita la solución a los conflictos que se planteaban entre el solicitante y el opositor de marcas en lo concerniente a su registro. Además, la práctica española ha demostrado que una de las principales virtudes del procedimiento arbitral lo es su celeridad y agilidad en su tramitación y también su economía frente al procedimiento judicial teniendo en cuenta que el laudo arbitral que se dicte estará dotado igualmente de “valor de cosa juzgada”. Finalmente, cabe destacar que una de las cuestiones más valoradas en el procedimiento arbitral de marcas lo es que la cuestión suscitada es decidida y resuelta por árbitros especializados en derecho de marcas, lo que asegura que las resoluciones dictadas sean correctas, justas y conforme a derecho.

En este trabajo, al analizar el derecho español, se ha podido reconocer la utilidad potencial de la aplicación del arbitraje en materia marcaria como medios privados para la resolución de controversias en materia de marcas. En particular, la neutralidad, flexibilidad y experiencia que ofrece el arbitraje permiten ajustarse a las necesidades de las partes en dichas controversias. Contemplar en un sistema legal, como ha ocurrido en España, la disponibilidad de la institución del arbitraje para solventar disputas en derecho de marcas, tiene como el objetivo fomentar la aplicación del arbitraje en materia tan específicas y complejas como el derecho marcario, sin perjuicio de la existencia de otras opciones legales disponibles para las partes.

Por tanto, el arbitraje debe ser una vía a utilizar por los particulares en caso de discrepancias en el proceso de registro de un signo distintivo que debe ser fomentado por el legislador, tal como ha ocurrido en España.

En el proceso de perfeccionamiento de las normativas venezolana en materia de arbitraje en temas marcarios, consideramos que hay elementos muy prácticos y novedosos en la normativa española, que pueden ser tomados como referencia para su inclusión en cualquier nueva regulación que se promulgue en el derecho venezolano.

En nuestra opinión, el seguir las pautas sobre arbitraje de marcas según el derecho español conllevaría grandes beneficios para el derecho venezolano, a saber:

- a. Especialización y Efectividad: El arbitraje de marcas según el derecho español se caracteriza por su especialización en cuestiones relacionadas con marcas y su enfoque en la resolución efectiva de disputas en este ámbito. Esto podría beneficiar al derecho venezolano al agilizar la resolución de casos de marcas y reducir la carga de trabajo en los tribunales ordinarios.
- b. Agilidad Procesal: El arbitraje de marcas en España permite una resolución más rápida de las disputas, lo que podría servir como un modelo para mejorar la agilidad procesal en el sistema legal venezolano. Esto sería especialmente valioso considerando las demoras comunes en los tribunales venezolanos.
- c. Especialización de Árbitros: La Ley de Marcas española establece que los árbitros deben tener experiencia en cuestiones de marcas. Esto garantiza que las decisiones se tomen de manera informada y precisa. Venezuela podría implementar un requisito similar para árbitros en casos de marcas, lo que contribuiría a la calidad de las decisiones.
- d. Cosa Juzgada: El arbitraje de marcas en España otorga a los laudos arbitrales efectos de cosa juzgada. Esto brinda certeza jurídica a las partes y podría fomentar la confianza en el sistema legal. Venezuela podría considerar una disposición similar para sus procesos de arbitraje de marcas.
- e. Descongestión de Tribunales: Al derivar disputas de marcas al arbitraje, el sistema de justicia venezolano podría experimentar una reducción en la congestión de casos, permitiendo a los tribunales centrarse en asuntos de mayor complejidad y enjuiciar más rápidamente otros tipos de casos.
- f. Fomento de la Resolución Alternativa de Disputas: El arbitraje de marcas en España ejemplifica cómo los sistemas legales pueden fomentar la resolución alternativa de disputas, lo que podría promover una cultura de solución de conflictos sin recurrir a procedimientos judiciales prolongados.

En resumen, el arbitraje de marcas según el derecho español ofrece una serie de beneficios que podrían ser valiosos para el derecho venezolano. Esto incluye la especialización, la agilidad procesal, la certeza jurídica y la descongestión de tribunales. Al adoptar ciertos aspectos de este sistema, Venezuela podría fortalecer su sistema de resolución de disputas en el ámbito de las marcas y mejorar la eficiencia y la eficacia de su sistema legal en general.